



Donostia–San Sebastián: Estructuras de gobernanza y acción colectiva ante la crisis.

Imanol Telleria
imanol.telleria@ehu.eus
Department of Political Science
& Public Administration
University of the Basque
Country – UPV-EHU
Spain

Asier Blas
asier.blas@ehu.eus
Department of Political Science
& Public Administration
University of the Basque
Country – UPV-EHU
Spain

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

Foto de portada por Imanol Telleria. *Proceso de participación: Nuestros barrios hacen más fuerte a Donostia.*

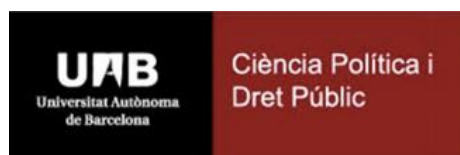
TRANSGOB: Transformaciones de la gobernanza urbana en el contexto de la crisis. Evolución y perspectivas de la gobernanza participativa en España y el Reino Unido.

El proyecto TRANSGOB aborda el impacto de la crisis económica en las formas de gestión urbana en España, contrastando la experiencia española con la del Reino Unido. El objetivo es analizar cómo las prácticas de gobierno participativo están evolucionando y sus perspectivas de futuro en un contexto marcado por la austeridad presupuestaria, el conflicto social y la crisis política. En términos más generales, queremos explorar las implicaciones de este tipo de dinámica de cambio de las relaciones entre los actores estatales y no estatales en el ámbito local.

Este proyecto fue financiado a través del Plan Nacional I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.

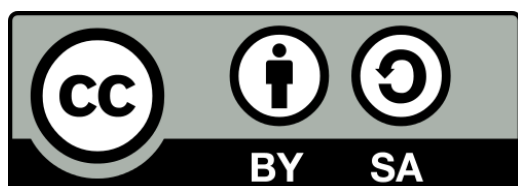


Número de proyecto: CSO2012-32817



Investigador principal: Dr Ismael Blanco, IGOP y Departamento de Ciencia Política y Derecho Público, Universitat Autònoma de Barcelona.

Este es un trabajo bajo la licencia [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Introducción

En este capítulo analizamos la evolución de los mecanismos de gobernanza en la ciudad de Donostia-San Sebastián para poder entender mejor qué respuestas se están dando frente a la actual crisis y qué relaciones se establecen entre la administración local y el tejido social.

En la primera parte veremos que Donostia se diferencia del resto de casos del Estado español por estar localizada en un entorno socioeconómico relativamente mejor y con menos desigualdad; las ciudades vascas disponen de una mejor y más autónoma financiación; los derechos sociales son más extensos y disfrutan de una mayor protección en el subsistema político vasco; y finalmente, habría que sumarle un distintivo coyuntural como es la presencia de un gobierno local alineado con una ideología a la izquierda de la socialdemocracia contemporánea. Sin embargo, este mejor punto de partida no significa que los efectos de la crisis no se estén manifestando.

Además, encontramos también un contexto social diferenciado que influye sobre la respuesta social frente a la crisis. En concreto, explicaremos la escasa influencia en el País Vasco y en Donostia del ciclo de movilización iniciado por el 15M en la primavera de 2011.

A partir de este conjunto de peculiaridades abordamos la principal discusión teórica de este capítulo que nos remite a las variaciones de la neoliberalización (Brenner *et al.* 2010) en el contexto de urbanismo de austeridad (Peck, 2012). Según esta visión, para comprender el neoliberalismo realmente existente, es necesario estudiar la variedad de formas y vías de reestructuración de la reglamentación dirigida por el mercado a través de lugares, territorios y escalas; es decir, la neoliberalización se entiende como un “proceso abigarrado, geográficamente desigual y dependiente de una trayectoria previa” (Brenner *et al.*, 2010b: 330). Demostraremos como la ciudad de Donostia presenta una serie de variaciones espacio temporales relevantes para el estudio de las transformaciones de la gobernanza en tiempos de crisis.

Por ello, en la tercera parte analizamos la trayectoria de la política participativa en la ciudad. Nos centramos en las respuestas actuales, tratando de identificar ejemplos concretos que nos ayuden a caracterizar la orientación política de las respuestas institucionales a la crisis. Estas respuestas, junto a la trayectoria del movimiento ciudadano y de acción social (clásico y nuevo surgido tras la crisis), generan un tipo de relación de carácter colaborativo entre administración local y tejido social que retroalimentan las dinámicas de gobernanza participativa en la ciudad. Todo ello se ve favorecido por una sociedad en la que los partidos políticos tienen un peso importante y gozan de conexiones significativas con el tejido asociativo.

El trabajo de campo se ha estructurado en base a entrevistas en profundidad realizadas en tres fases diferentes entre 2013 y 2015: una primera exploratoria de acercamiento a la realidad con informantes estratégicos del tejido social (personas de colectivos vecinales, feministas y activistas urbanos y de la administración); otra segunda fase de profundización de las cuestiones más importantes con agentes de colectivos cuyo protagonismo ha sido relevante (cinco personas), así como otros responsables municipales

de áreas más específicas (cuatro personas); y una tercera cuyo objetivo ha sido el seguimiento de los procesos y mecanismos estudiados en la que se ha vuelto a entrevistar a las personas de las fases anteriores. Codificamos las entrevistas para mantener el anonimato de las personas entrevistadas y a la vez identificar su origen: Agente social (AS), personal técnico (PT) o responsable político (RP).

Este informe concluye con una valoración final del estado de la gobernanza participativa en la ciudad, apuntando los factores claves que la sustentan y subrayando una vez más las particularidades estructurales y culturales que concurren en el caso de Donostia.

Contexto diferenciado respecto del estado español

Donostia-San Sebastián tiene 186.126 habitantes y un área metropolitana de 436.000. Las actividades principales de la ciudad son el comercio y el turismo. Además, la ciudad está circundada por un cinturón industrial en la que el segundo sector sigue siendo importante.

Al margen de esto, Donostia es una ciudad que por su ubicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y la provincia de Gipuzkoa, presenta unas características diferenciadas de otras ciudades del contexto español y vasco que son necesarias tener en cuenta para nuestro estudio. Destacamos **cuatro elementos** importantes: a) los menores efectos de la crisis a la luz de los principales indicadores económicos, b) una mayor autonomía financiera, c) la fortaleza de las políticas sociales del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa y d) los efectos del final de la lucha armada de ETA y un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia contemporánea.

En el primer elemento destaca el retraso e impacto diferente que la crisis económica del 2008 ha tenido en el País Vasco, y muy especialmente en Gipuzkoa y su capital Donostia. La renta familiar media es más alta y la tasa de desempleo más baja en comparación con las medias tanto del Estado español como del País Vasco.

El segundo elemento clave se refiere a la particularidad de la que gozan los territorios vasco-navarros respecto a su financiación, lo cual confiere una mayor autonomía financiera a los municipios vascos en comparación con el resto españoles. Las provincias forales vasco-navarras disponen de un concierto económico propio que les asigna un grado de autonomía amplio, hasta prácticamente permitirles diseñar un sistema fiscal propio, “lo que, a efectos prácticos, les confiere una capacidad financiera superior (entre un 50 y un 60%, aproximadamente) al de las Comunidades de régimen común, facilitando el diseño de un verdadero sistema de participación en los ingresos concertados o convenidos” (Cordero y Murillo, 2008: 41).

El tercer elemento para entender las particularidades de Donostia son las políticas sociales, entre las que destaca el desarrollo de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y en menor medida las Ayudas de Emergencia Social (AES). Ambos instrumentos se han demostrado eficaces en el objetivo de mantener un alto grado de cohesión social (Moreno, 2010: 475). De hecho, fue la primera comunidad autónoma en España en instaurar un

sistema público de garantía de ingresos económicos en 1989 y es la única comunidad autónoma que puede equiparar su mecanismo con la mayoría de los países de Europa occidental (Lavia, et al. 2014: 637). Después del 2008, tras el crecimiento de la demanda, en las principales poblaciones vascas no se han podido cubrir la totalidad de estas ayudas con presupuesto del Gobierno Vasco y ciudades como Donostia la han cubierto con el presupuesto municipal.

Finalmente, el cuarto elemento diferenciador del contexto donostiarra es de carácter político: el cese definitivo de la actividad de ETA anunciado en el 20 de octubre de 2011. Este hecho ha facilitado la vuelta progresiva de la Izquierda Abertzale a la contienda electoral y su acceso a la alcaldía de Donostia con un programa a la izquierda de la socialdemocracia contemporánea. Elemento este de vital importancia a la hora de entender las políticas que ha priorizada el equipo de gobierno, así los explicaba uno de los Responsables políticos:

“... En otro contexto político (de ausencia de austeridad) hubiésemos hecho más cosas y con mayor facilidad (...) hemos tenido que reducir gastos en jardinería, en mantenimiento, publicidad... (...) para así poder mantener el gasto de bienestar social (..) ¿Qué ha bajado? En personal los sueldos se han congelado y bajado, no se cubren sustituciones, no hay dinero para inversiones...”

Respuestas a la crisis

En el caso de Donostia llama la atención la escasa influencia que el ciclo de movilización iniciado por el 15M. La explicación se puede ordenar en dos dimensiones, una primera estructural y otra segunda cíclica-coyuntural.

En la dimensión estructural encontramos tres factores:

- a) Las movilizaciones estilo 15M asociadas a nuevos movimientos sociales urbanos tienen presencia e impacto importantes en grandes ciudades (Fernández, et al. 2012). En cambio, Donostia es una ciudad de tamaño pequeño con una población sensiblemente envejecida. La combinación del tamaño pequeño y de la edad de sus habitantes, arroja una realidad en la que la población entre 15 y 35 años tienen un peso relativo y sobre todo cuantitativo pequeño (el 20,3% de los habitantes, es decir, 37.832 personas según el padrón municipal de 2014).
- b) En la CAPV la crisis socioeconómica es más atenuada que en el resto de España y hay un sistema de protección social más sólido y desarrollado que amortigua las consecuencias con más eficacia, lo cual constituye un dique de contención parcial para la protesta social. Además, en este período el gobierno municipal estuvo en manos del partido más izquierdista del sistema de partidos vascos, lo cual actuó a la vez como elemento desmovilizador y reforzador del sistema de protección social, tal y como decía un miembro del equipo de gobierno *“en una situación económica dura los servicios (sociales) se han mantenido y otros se han mejorado”* (RP. 1). Sin embargo, tampoco habría que desdeñar la presencia general en la política española del discurso de la crisis

y necesidad de austeridad. Éste discurso ayuda al gobierno local a mantener las expectativas bajas, así lo expresaba una técnica al hablar que había observado en el tejido social:

“Lo que sí veo es un tejido social, siempre en la relación con la administración, consciente de las limitaciones de la institución y con una actitud más responsable (...) una actitud muy de sentido común, entendiendo que la crisis también condiciona a las soluciones que se pueden dar” (PT.1).

- c) El nacionalismo vasco es un agente clave en las luchas socioeconómicas de la CAPV. Por ejemplo, la mayoría sindical en la CAPV está en manos de los sindicatos nacionalistas vascos y estos cuando dinamizan su lucha social tratan de diferenciarse de las que se impulsan a nivel estatal (Elorrieta, 2012). Además, ésta dinámica se acentúa más en Donostia, la capital más vascófona y nacionalista vasca de todas las del País Vasco, lo que sin duda dificulta el posible éxito de cualquier dinámica movimentista que nazca a nivel estatal y que llegue por un efecto de mimetismo. Finalmente, es oportuno señalar que las principales familias-partidos del País Vasco están muy asentados en la sociedad, de tal manera que se podría decir que parcialmente está segmentada en diferentes niveles: medios de comunicación, sindicatos y tejido asociativo, lo que hace que haya unas relaciones poco autónomas entre los diferentes agentes.

Más allá de la dimensión estructural, también la dimensión cíclica-coyuntural relacionada con el fin de la actividad armada de ETA explica parcialmente el escaso eco de los movimientos de indignados en la CAPV. Resulta necesario tener en cuenta el alto grado de crispación social y hartazgo que se vivió en la sociedad vasca, especialmente desde que a finales de los 90 las movilizaciones sociales en contra de la violencia de ETA ganaron protagonismo, lo cual conllevó una dinámica de enfrentamiento ciudadano en un período salpicado por la violencia callejera, atentados de ETA y una represión cada vez más extensiva contra diferentes sectores de la Izquierda Abertzale. La consecuencia fue el inicio del declive de los movimientos sociales a principios del siglo XXI. Posteriormente, como forma de impulsar la distensión, desde la Izquierda Abertzale se facilitó una reducción paulatina de la conflictividad social para favorecer su estrategia de normalización política.

Todo esto explica que la movilización y los ecos de protesta de los indignados en Madrid y en otras partes del mundo, no hayan encontrado en la CAPV un acomodo en las redes existentes ni en la población no organizada, y aunque sí han surgido algunos grupos al paraguas de iniciativas estatales, distan mucho de la fuerza que han adquirido en otros lugares (Perugorria and Tejerina, 2014).

I. Variaciones de la neoliberalización y su influencia en la gobernanza.

Como hemos dicho en la introducción, el caso de Donostia es un buen ejemplo con el que destacar las variaciones espacio-temporales de la neoliberalización. Estas variaciones nos sirven para explicar la forma en la que “las transformaciones locales se relacionan con

tendencias más amplias” (Harvey, 2005:87) atendiendo con suficiente sensibilidad la importancia de los contextos.

Siguiendo la propuesta metodológica de Brenner, Peck y Theodore, nos fijamos especialmente en los “sistemas de transferencia normativa interjurisdiccional” (Brenner et. al, 2010b) y su influencia en la gobernanza urbana. La transformación del gobierno a la gobernanza en el escenario local (Blanco et. al, 2011) ha supuesto una serie de adaptaciones de los mecanismos institucionales con estrategias regulatorias prototípicas para gobernanza urbana. Estos nuevos mecanismos institucionales se relacionan con la segunda generación de estudios sobre las redes de gobernanza (Sorensen y Torfing, 2009), según la cual el interés se centra en el impacto atendiendo a la efectividad y la calidad democrática de las mismas. Son muchos los estudios que, aunque con algunas diferencias (Subirats *et. al*, 2008; Papadopoulos y Warin, 2007), ponen el énfasis en estas dos cuestiones. Sorensen y Torfing, (2009) identifican seis criterios sobre efectividad y cuatro sobre calidad democrática. Los criterios de efectividad tienen que ver con la calidad de la información en el proceso, la innovación de los mecanismos, el alcance de las políticas, la coordinación y la flexibilidad de la propia administración y en último lugar la confianza entre actores de cara al futuro. Los criterios de calidad democrática, por su parte, serían el monitoreo de políticos elegidos, la diversidad de actores, la responsabilidad de los mismos ante la ciudadanía y la gestión de la propia red con reglas y normas de carácter democrático (incluida la equidad procesal y agonística). Estos criterios pueden ser aplicados en una lectura crítica de la política de participación impulsada desde el gobierno local.

Además, volviendo a la gobernanza urbana como transferencia normativa interjurisdiccional, observamos el peso de la trayectoria local y el paisaje institucional en el desarrollo regulatorio desigual. Es decir, bajo el mismo concepto de gobernanza se desarrollan formas diferentes de integrar la participación y la gestión de las políticas públicas. No hay duda sobre el importante papel que la gobernanza ha jugado en el proceso de neoliberalización de las ciudades (Swyngedouw, 2005), pero como venimos argumentando, el modo concreto en que se desarrolla marca diferencias importantes.

Así, este desarrollo desigual podría conducirnos a “escenarios de contraneoliberalización” (Brenner et. al, 2010b) coincidentes con lo que los autores caracterizan como contraliberalización desarticulada. Este escenario, coherente con la orientación ideológica de los gobiernos locales de la ciudad estudiada, plantea ciertos experimentos regulatorios de limitación de mercado (fragmentados y poco coordinados) aunque el régimen normativo general sigue dominado por las lógicas de mercado. Encontramos cierto paralelismo con la estrategia adaptativa neocomunitarista del tránsito del Estado Nacional del Bienestar Keynesiano (KWNS) al Estado Posnacional Competitivo Shumpeteriano (SWPR) caracterizado por Jessop (2003) que se ponen de manifiesto en la gobernanza de las políticas sociales. Partiendo de las limitaciones de la política local, esta estrategia pone en marcha acciones de expansión de la economía social, el fortalecimiento del tercer sector financiado por poderes públicos y la redirección de los impuestos en búsqueda de mayor cohesión social como la renta de ciudadanía o ayudas a la dependencia.

Por ello, en el estudio de las relaciones socio-espaciales (Jessop et. al, 2008) necesitamos de una mirada más completa, que además de las redes, incluya el territorio, el

lugar y la escala. Es la combinación de estas dimensiones aplicada a una política pública, la que nos permite un análisis más en profundidad de las transformaciones de la gobernanza urbana, y la que, como explicaremos a continuación, nos revela un caso peculiar de urbanismo de austeridad. En consecuencia, apuntamos también algunas cuestiones sobre las políticas sociales referidas a la relación entre la administración local y los agentes del Tercer Sector porque la gestión de estas políticas conecta con una de las estrategias del urbanismo de austeridad (Peck, 2012) como es el *dumping escalar*, es decir, la tendencia a desplazar hacia abajo (en nuestro caso hacia el gobierno local) la gestión de los conflictos sociales.

II. Gobernanza participativa: cambios en el gobierno y profundización del modelo.

En 1991 con la llegada al poder de un alcalde del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE, nacionalismo español de centro-izquierda) se empieza a conceptualizar y desarrollar un modelo de gobernanza participativa para la ciudad. Odón Elorza, el nuevo alcalde de Donostia tenía como una de sus referencias al alcalde socialista de Barcelona, donde se estaban implementando políticas de participación ciudadana más ambiciosas que en la capital guipuzcoana. Pronto las relaciones entre las dos ciudades y sus respectivos alcaldes se estrecharon; probablemente ayudando a que Donostia introdujera en su agenda el tema de la participación ciudadana y su modernización y mejora. Un ejemplo de ello es la aprobación del Reglamento de participación ciudadana de Donostia en 1997, el primero de la CAPV (Ajangiz y Blas, 2008: 38) y la base sobre la que se crearon diferentes instrumentos de participación y gobernanza.

A partir del año 2002 los socialistas dejaron de gobernar en coalición con partidos de centro-derecha, para pasar a gobernar primero solos en minoría y luego en coalición con otras formaciones de izquierda. Este hecho impulsó nuevamente la política de participación ciudadana. Así, tras las elecciones del 2003, el nuevo equipo de gobierno, también en minoría y formado por los socialistas en coalición con Ezker Batua-Berdeak (izquierdismo), optó por poner en marcha un proceso de Presupuestos Participativos limitado y controlado.

Desde el 2001 se pueden identificar tres fases relacionadas con la política de participación ciudadana en Donostia. La primera fue de impulso de la participación (2001-2007), en la que el gobierno municipal la convirtió en uno de sus emblemas principales (tanto a nivel de ciudad, como de proyección exterior de la misma a través de las redes internacionales sobre el tema). En 2002 se creó la oficina de participación ciudadana y entre 2001 y 2005 el propio alcalde se implicó muy activamente, e incluso lideró en persona, o a través de su equipo técnico, el impulso de esta política en diversas redes municipales: la red *Kaleidos* de políticas de proximidad, la Asociación de Municipios Vascos, el *Observatorio Internacional de Democracia Participativa* y la Federación de Municipios y Provincias españolas. En estos primeros años se apuesta por una variedad de mecanismos de participación que ejemplificasen el valor del compromiso adquirido: un núcleo de intervención participativa en la parte vieja, un plan de desarrollo comunitario en un complejo barrio periférico, un proyecto de desarrollo comunitario en otro barrio periférico y que acaba combinándose con un proyecto de inversiones para rehabilitar el barrio y cohesionarlo con la ciudad, el mencionado presupuesto participativo de carácter limitado, audiencias públicas con jóvenes, el programa “la ciudad y los niños y niñas”, una consulta

ciudadana sobre el diseño de una importante plaza, debates con grupos y asociaciones para la elaboración de distintos planes sectoriales y transversales...; es decir, el objetivo era *“desarrollar la participación a través de proyectos concretos”*.¹ Donostia es en esta etapa una de las ciudades del Estado con mayor innovación en procesos participativos (Navarro, Cuesta y Font, 2009) incentivando la deliberación pública y la profundización democrática.

El diagnóstico actual de la propia Oficina de Participación sobre esta etapa enumera algunos problemas de ese diseño como la desconexión entre experiencias, la falta de transversalidad en la organización municipal o no aprovechar la estructura territorial de equipamientos de proximidad². A pesar de todo, este impulso, aunque desordenado y con una perspectiva acusada de funcionamiento *top-down*, deja un poso en los modelos de gestión de lo público que pone en valor la participación ciudadana y los mecanismos concretos asociados a la misma. Esta etapa se cierra simbólicamente con la aprobación del Plan Director de Participación Ciudadana (diciembre de 2006) y con la Norma de Participación Ciudadana elaborada parcialmente de forma participada (julio de 2007).

En la segunda etapa (2007 a 2011) la prioridad del Departamento de participación ciudadana, apoyado por un gobierno de coalición de izquierdas con mayoría absoluta, se centra en la que la campaña por lograr la capitalidad cultural europea para 2016. La pérdida de protagonismo de la participación, coincidente temporalmente con el inicio de la crisis, no será revertida hasta que en el 2011 Bildu (coalición de soberanistas vascos de izquierdas) llega a la alcaldía.

“Ahora hay una voluntad por dar estabilidad y estructura al sistema de participación, porque hasta hace poco tiempo vivíamos la sensación de hacer cosas puntuales que no consolidaban un sistema estable (...) Nuestro objetivo principal en este momento es generar cultura política y desde ahí enfocamos la acción en la participación; la participación política, la cultura política como base necesaria para que verdaderamente esto siga para adelante; dar pasos para ir institucionalizando, intentando conseguir garantías, procedimientos y recursos que puedan ir dando cobertura de algo estable a todo esto de la participación.” [PT. 1]

Esta es la tercera etapa con el gobierno en minoría de Bildu (2011-2015) en la que se pretendió devolver un papel más protagonista a la política participativa haciendo una reflexión sobre el modelo anterior e introduciendo elementos nuevos. Esto ocurre en un contexto en el que empezaron a sentirse los efectos de la crisis de forma clara, por ejemplo, el Ayuntamiento tuvo una reducción aproximada al 25% del presupuesto municipal en comparación con la legislatura anterior, sin embargo, el presupuesto para participación se amplió. En este sentido, tal y como explicaba un miembro del gobierno: *“los cambios significativos en la política de participación no han dependido de la crisis, depende del*

¹ Departamento de Barrios y Participación Ciudadana: El Derecho a la Participación y su Promoción en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, diagnóstico de participación. Marzo de 2006.

² Entrevista con el personal técnico del Ayuntamiento que valoraban la nueva experiencia de la última etapa (2011-2015) precisamente por subsanar estos problemas: *“Nos sirvió también para evidenciar la necesidad de revisarnos dentro del Ayuntamiento en el sentido de coordinación y transversalidad de todas las áreas”*.

político y de la política que lleve, este gobierno no hubiera sido más participativo por la crisis económica, ha coincidido” (RP.2)

Entre los proyectos estrella del equipo de gobierno de Bildu, hay que mencionar el proceso participativo *“Los barrios y pueblos fortalecen Donostia”* iniciado en 2012 y que culmina con la elaboración participativa de una parte del presupuesto municipal en 2015 que buscó comprometer al tejido social de los barrios en su gestión. El Presupuesto Participativo 2015 recogió un total de 220 aportaciones en áreas como urbanismo, desarrollo económico o bienestar social. Tras la reunión inicial en dieciocho barrios con presencia del alcalde, el concejal de participación y técnicos municipales, la responsabilidad de dinamizar las siguientes reuniones de barrio pasó a recaer en las asociaciones de vecinos que contaban con la ayuda y presencia de personal técnico del Ayuntamiento. Las tareas de estas reuniones de barrio se podían alargar hasta tres meses para hacer tres propuestas por cada una de las cinco temáticas definidas por el equipo de gobierno, lo que arrojaba un total de 15 propuestas por cada barrio. Posteriormente, más de 100 personas del equipo de gobierno y del personal técnico trabajaron de forma transversal para tomar la decisión de excluir 48 propuestas en base a criterios técnicos y/o políticos. El resto se incluyeron en el Proyecto de presupuestos 2015, 116 para que fuesen ejecutadas en el año del presupuesto y 56 para que fueran iniciadas en el 2015 o 2016.

Tras la toma de decisión, el alcalde y personal del equipo de gobierno hicieron una devolución por barrios del análisis técnico y político de las 15 propuestas previamente priorizadas, razonando su inclusión o no en el presupuesto de 2015. El problema surgió cuando los presupuestos no pudieron ser aprobados en el pleno municipal. La consecuencia fue que los presupuestos de 2014 se prorrogaron y el equipo de gobierno tuvo que abordar una tarea ingente para tratar de encajar parte de las propuestas en el presupuesto con el objeto de minimizar la frustración que podía haber surgido entre los participantes en el proceso.

Conscientes de las limitaciones de la experiencia previa, desde el Área de Participación se plantea una reflexión con la que afrontar el encaje entre la lógica participativa y representativa en la gestión real. El resultado del proceso de reflexión diferencia tres espacios diferentes: el de los representantes, en el que la clave desde la participación es la transparencia y la capacidad de poder controlar la actividad de los cargos públicos (democracia representativa); el de los procesos participativos, donde lo importante es generar procesos creativos que consoliden una sociedad civil activa (democracia participativa), así lo expresaban desde el área de Participación ciudadana:

“(...) que sirva para que el movimiento asociativo se refuerce, que uno de nuestros objetivos, para nosotros (...) seamos conscientes de cómo debe de ser nuestra tarea facilitadora, y ojalá nos sirva también para estructurar unas relaciones, sistematizadas y permitan una dinámica estable y duradera” (PT. 2)

Por último, el de la capacidad de decisión de la ciudadanía, a través de consultas vinculantes, sobre temas concretos que afectan a sus barrios o a la ciudad (democracia directa). Estos tres espacios o ámbitos relacionados con la participación tienen su propia autonomía, y sobre todo sus propias dinámicas de funcionamiento, pero deben estar conectados entre sí (ver Tabla 1).

Tabla 1: El modelo participativo diseñado por Donostia en la legislatura 2011-2015

| <i>Ejes/espacios de ejercicio político</i> | <i>Modelos de democracia</i> | <i>Actuaciones</i> |
|--|------------------------------|--|
| Representativo | Democracia representativa | Medidas de control y rendición de cuentas. Transparencia de gestión (ITA). Transversalidad en la administración. |
| Dialógico | Democracia participativa | Impulso de procesos participativos. Colaboración con las iniciativas de la sociedad civil. |
| Decisorio | Democracia directa | Reglamento de Consultas Ciudadanas no referendarias. |

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Donostia.

Por otro lado, otra tarea ha sido el proceso de revisión de los doce consejos sectoriales y el consejo social³ que se ha hecho con el mundo asociativo, con técnicos y con políticos de la oposición y del gobierno actual. Se percibía desde la administración y desde la ciudadanía organizada la necesidad de reformular este modelo que no cumplía con sus objetivos iniciales y que derivaba hacia lógicas de funcionamiento clientelista.

El Consejo de Igualdad ha sido una excepción positiva que, por otro lado, demuestra la calidad democrática de las redes de gobernanza de la ciudad. Combinando la estrategia del feminismo de igualdad de insertar la perspectiva de género en las administraciones y sus políticas públicas con las prácticas de empoderamiento de las mujeres del feminismo de la diferencia, el movimiento encontró en el consejo una ventana de oportunidad. Como lo explica una de sus protagonistas *“su origen tiene que ver con que en un momento dado, alguien del ayuntamiento impulsó un proceso con las asociaciones y colectivos que ya existían, respetando sus ritmos, su diversidad...”* (AS. 1). Esta doble vía cristalizó en la creación, mediante un proceso participativo, de La Casa de las Mujeres, un espacio de encuentro, debate y reflexión de las mujeres, para poder incidir en las políticas y fomentar la participación y el asociacionismo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esa participación en su creación tiene ahora continuidad en un modelo de cogestión entre el Ayuntamiento y una asociación de mujeres creada *ad hoc* para el proyecto que aspira a

³ El Consejo Social es el espacio de coordinación de las diferentes estructuras y organismos de participación existentes en la ciudad, en teoría debería de ser el nudo central de una red de gobernanza donde se encuentran representantes de asociaciones de todo tipo, sector privado de la economía, sector financiero, transportes públicos, entidades públicas etc.

representar la pluralidad del movimiento feminista. La Casa apuesta por ser “*participativa, transformadora, innovadora, plural, viva, abierta, educadora, influyente, apartidista, solidaria, autónoma e independiente*” (AS. 1).

Respecto a la transversalidad, desde el Área de Participación se ha trabajado en la formación específica sobre participación con personal técnico de otras áreas que ha generado una red comunicativa interna compuesta por un técnico referente de participación en todas las áreas municipales. Además de la coordinación interna, este personal técnico ha participado de las reuniones descentralizadas del programa “*Los barrios y pueblos fortalecen Donostia*”.

Por otro lado, en el ámbito de los procesos participativos concretos en los últimos años ha bajado considerablemente la cantidad de experiencias significativas; algunos de los procesos anteriores pierden fuerza, y como novedosos destacan los de planeación urbanística vinculada al proceso de canalización del Urumea, el Plan Donostia Amigable elaborado desde la perspectiva y con la participación de las personas mayores (tanto en grupos organizados como no organizados) y el proceso de coordinación de redes desde una perspectiva comunitaria que se está dando en la parte vieja de la ciudad. Desde la Concejalía de Igualdad, Migraciones y Juventud, en colaboración con la de participación, se ha impulsado también un proceso participativo de definición de usos en torno al edificio abandonado de titularidad pública Villa Alegría-Txantxarreka, en el barrio del Antiguo, que culminó a finales de 2013 con la concesión del local a la “Gazte Asanblada” (Asamblea de jóvenes) del barrio y que en la actualidad es gestionado por asociaciones y movimientos sociales.

III. Relaciones entre tejido social y administración local.

Como hemos planteado al principio, el estudio de las relaciones entre movimientos sociales e instituciones públicas conforma la tercera parte de este análisis de la ciudad. En parte deriva, de las lógicas de las políticas públicas que venimos caracterizando, especialmente del modelo de participación ciudadana que desde la administración se impulsa; sin embargo, la propia configuración del momento social, sus objetivos y su trayectoria histórica son también elementos importantes que influyen sobre esa relación.

En este sentido, planteamos, desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, una doble diferenciación operativa del tejido social de la ciudad, según la cual distinguiríamos por un lado, entre el movimiento social que existía antes de la crisis y el que ha surgido después; y por otro, entre el movimiento vecinal clásico (representado por las asociaciones vecinales de los distintos barrios) y los movimientos sociales y organizaciones de acción social que llevan años trabajando en el territorio. La presencia de nuevos actores, como veremos a continuación es bastante limitada, aunque sí han surgido algunos, que precisamente ponen a prueba tanto las prácticas de gobernanza participativa, como la profundidad y alcance de las políticas sociales.

El movimiento vecinal existente en Donostia se caracteriza por una importante atomización de las asociaciones de los distintos barrios y, aunque ciertas relaciones siempre han existido, no se han conformado espacios colaborativos más estables hasta la última

legislatura gobernada por Bildu. Esto tiene que ver con el carácter y la historia de la ciudad, en la que el desarrollo industrial y urbanístico ha sido muy desigual por zonas. El centro y los barrios cercanos al litoral siempre han estado volcados en el turismo y el sector servicios. Sin embargo, los barrios periféricos han solido vivir lejos de esa realidad, dominados por un paisaje industrial, a veces mezclado con lo rural, y en la mayoría de los casos desconectados parcial o totalmente del centro. El ejemplo extremo de desconexión son las áreas estrictamente rurales que aún persisten dentro de los límites geográficos del municipio, en algunos casos como enclaves sin conexión territorial. Todo ello explica que se haya generado poca conciencia colectiva de ciudad y en algunos momentos históricos hasta cierto conflicto entre zonas periféricas y el centro de la ciudad.

A partir de los 90 la situación de los barrios periféricos mejoró sensiblemente, llegaron servicios y mejoras y la ciudad empezó a expandirse, haciendo que algunos barrios que estaban desconectados acabasen conectándose. Esto facilitó la desmovilización, pero en general, el debilitamiento del tejido asociativo vecinal tenía que ver más con la falta de relevo generacional. Sin embargo, en los barrios que se ha dado un rejuvenecimiento de la población y/o que muestran aún carencias de servicios o problemas importantes asociados a urbanismo, como, por ejemplo, en la cuenca del río Urumea donde periódicamente hay riadas, el movimiento vecinal, aunque en la mayoría de los casos de forma reactiva, se ha recuperado relativamente.

Por otro lado, también hay una parte del movimiento vecinal, el más activo en los últimos años, que reconocía una sintonía política con el gobierno de Bildu, lo cual estaba posibilitando experiencias compartidas y procesos en los barrios que contaban con el apoyo e incluso subvención del ayuntamiento y de la diputación, pero que una vez se dejan en manos de la ciudadanía pierden fuerza.

Algo parecido sucedió con el Plan Comunitario de Alza (Telleria, 2008), que ha perdido fuerza por la debilidad y desgaste del propio movimiento vecinal y porque el Ayuntamiento una vez que impulsa el proceso, probablemente con buen criterio, no puede mantener el proyecto sine die insuflando recursos económicos para tratar de dinamizarlo con intervención exógena. Algo similar pasó en el barrio de Martutene, donde durante aproximadamente ochos años se contrató a agentes externos para impulsar un trabajo de desarrollo comunitario que finalizó con la llegada de Bildu al poder. Por todo ello, el equipo de gobierno municipal impulsó con el movimiento vecinal un proceso de reflexión colectiva dinamizado por el Área de Participación con el objetivo de redefinirse, orientar de forma más adecuada su labor y su papel en las dinámicas sociales y políticas de la propia ciudad: *“con relación a los movimientos asociativos estamos como facilitadores intentando propiciarles las herramientas, las relaciones que puedan necesitar para que la comunicación entre ellos pueda ser mejor”* (PT.1).

Con ese objetivo en el año 2013 el Ayuntamiento creó un espacio de encuentro, *Auzo Elkarte* *en Bilgunea* (espacio de encuentro de las Asociaciones de Vecinos), sin reglamentarlo para no constreñir su evolución.

“Con este grupo lo primero que nos decían es que está muy bien que estas relaciones sean mejores (con la administración), pero que a ellos también les hacía falta mirarse un poco hacia dentro, que ni sabían ya la evolución a dónde les había llevado, para que

estaban, a qué se dedicaban y cómo estaban; entonces nosotros lo que hicimos es facilitarles un escenario con una asistencia técnica para que trabajaran con ellos en este sentido” (PT.2).

Las asociaciones lo valoraron de forma muy positiva, por ello en el 2015 decidieron convertirse en un foro para autonomizarse del Ayuntamiento en su funcionamiento y así no depender de los posibles cambios de gobierno y voluntades políticas. Además de este foro, el Ayuntamiento gobernado por Bildu en el marco del proyecto *Donostia Berritzen* (Renovando Donostia), orientado a temas de infraestructuras y mantenimiento, cada semana tenía una reunión en un barrio de la ciudad con los concejales y personal técnico del departamento implicado, los referentes de la participación del barrio y la asociación de vecinos.

Respecto de los movimientos sociales y colectivos de acción social (tercer sector) que ya trabajaban en la ciudad, cabe señalar que *“han cogido fuerza aquellos movimientos del tejido social que trabajan sobre necesidades básicas y con colectivos que sufren más la crisis” (PT.1)*. Entre estos colectivos se encuentran *Cáritas Diocesana*, *RAIS* (Red de Apoyo a la Inserción Socio-laboral), *Arrats* (realiza atención Integral a personas presas y expresas), *Emáus* (trabaja en el ámbito de la inclusión social) *Kolore Guztiak* (trabaja con jóvenes Extranjeros No Acompañados), *Cruz Roja*... Son colectivos que en gran medida ya trabajaban en red antes de la crisis, y que en cierta forma las han intensificado en los últimos tiempos, aunque la colaboración no va más allá de la mejor gestión de los recursos y servicios que realizan. En general, son escépticos respecto de los nuevos espacios participativos institucionales y critican que se adapten a las necesidades de las personas con las que trabajan: *“¿me pregunto si realmente estas herramientas y medios están adaptados a todas las personas y a todos los ciudadanos, me refiero en cuanto a horarios, publicidad, a idiomas... estamos facilitando la participación de todas las personas?” (AS.2)*.

Por parte, responsables políticos del Área de Bienestar Social, Cooperación y Movilidad, destacan que el tercer sector es muy diverso, subrayando que algunas organizaciones hacen un trabajo importante y muy eficaz ofreciendo un tipo de asistencia no contemplada como servicio público por parte de las instituciones y que si recayera sobre estas tendría un costo de recursos muy grande.

Sin embargo, la posición del equipo de gobierno sobre la relación con parte de los colectivos de acción social es crítica: *“el tercer sector ha sido capturado por la administración y, viceversa, la administración pública también ha sido capturada por el tercer sector, porque le resulta muy fácil en vez de asumir su responsabilidad pública delegarla en éste” (RP.2)*. Contra esta tendencia el edil dejaba claro sus principios indicando que *“la iniciativa privada está bien, siempre y cuando la administración pública sea garante de los derechos que le corresponden al ciudadano/a” (RP.2)*. En esta línea mostraba sus dudas *“sobre la cogestión, algunos servicios como el de la Casa de las Mujeres son una herramienta muy eficaz (...) pero hay cuestiones que se tienen que gestionar directamente por funcionarios, de hecho se degradaría el servicio si no fuera así” (RP.2)*. La idea básica que expresaba era que la administración tiene que atender sus obligaciones como servicio público sin delegar en terceros vía subvenciones, especialmente crítico era con los convenios que según él limitan mucho el control y rendición de cuentas del servicio por

parte de la administración, ya que en este esquema la asociación subvencionada dispone de una amplia autonomía en el diseño del servicio y en el uso del dinero público recibido. En este punto reiteraba su apuesta por regular bien los derechos y las políticas, y en los casos que se externalice el servicio hacerlo vía concurso.

Es posible que ésta actitud del equipo de gobierno haya llevado a algunas pequeñas fricciones con parte del tercer sector. Por ejemplo, algunas asociaciones crearon comedores para personas necesitadas o realizaron repartos de comida que el Ayuntamiento ha tratado de evitar subvencionar con algunas protestas y eco en los medios de comunicación. La respuesta del Área al respecto era clara, afirmando que el Ayuntamiento lo que hace es dar directamente dinero a aquellas familias necesitadas para que lo gasten como consideren oportuno y no tengan que exponerse socialmente, ya que desde el punto de vista del derecho social, podría alimentar un sentimiento de inferioridad e incluso de humillación.

En lo referente a otros actores del tejido asociativo, en Donostia, no resulta fácil identificar nuevos actores sociales que hayan surgido después de la crisis, aunque sí hay algunos movimientos y expresiones concretas que, como decíamos, ponen a prueba, además de los propios mecanismos de gobernanza, la eficacia y el compromiso real de las instituciones con ciertas políticas sociales. En concreto, *Stop Deshucios* y *Duintasuna Elkarte*, son dos de los más activos a nivel de ciudad. El primero surge muy vinculado al ciclo de movilización generado por el 15M y en el marco de la coordinación estatal del PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Además del servicio de asesoría que ofrecen a las personas afectadas, a nivel de movilización destaca la campaña de recogida de firmas para la ILP que se desarrolló entre 2012 y 2013 donde lograron un apoyo importante (muy por encima de lo que el procedimiento legal exigía al territorio de Gipuzkoa). Otra línea de trabajo para la Plataforma ha sido la de promover mociones en los ayuntamientos instándoles que actuaran frente a las entidades bancarias que ejecutan desahucios en sus municipios, y la respuesta de los partidos políticos a nivel de Gipuzkoa, exceptuando el PP, ha sido positiva, llegando a aprobarse muchas de ellas. Sin embargo, como advierten desde la plataforma, y refiriéndose también a Donostia, donde se han aprobado varias declaraciones institucionales en este sentido, “[...] *lo que hace falta son políticas activas que pongan esas mociones en marcha*” (AS.4). Más concretamente, la valoración por parte de la plataforma del actual gobierno municipal es que es más cercano y se muestra más receptivo a sus reivindicaciones, colaborando y facilitando actividades del colectivo, aunque a nivel de políticas concretas, le reclaman un mayor compromiso en medidas palpables.

En concreto, desde estos colectivos se exige a las administraciones medidas concretas que regulen aún más las actuaciones de las entidades financieras. Se trata de un tema complejo desde el punto de vista de las competencias municipales, aunque la postura crítica del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa (ambas gobernadas por Bildu en el período 2011-2015) en el proceso de privatización de Kutxabank (Fundación bancaria surgida de las antiguas Cajas de Ahorros provinciales) pidiendo mayor control público y siendo agentes activos contra los desahucios se corresponde con las demandas de estos grupos. Aunque no hayamos realizado un análisis sustantivo de estas políticas, cuestiones como estas, sumadas a la complementación de las Ayudas de Emergencia social cubiertas por el presupuesto municipal (aunque no le correspondiera como competencia

legal) ponen de manifiesto cómo el gobierno local ha actuado en contra del *dumping escalar* al que hacíamos referencia como una de las estrategias del urbanismo de austeridad.

Este breve recorrido por las políticas de participación y algunas políticas sociales, sumado a la rápida caracterización del movimiento social que hemos realizado, nos permite sacar unas primeras conclusiones sobre la relación entre los agentes del territorio. Podemos afirmar que las relaciones existentes se caracterizan por el respeto mutuo y la colaboración, habiendo espacios y experiencias anteriores y actuales que permiten consolidar esta dinámica. El menor impacto de la crisis en la ciudad ha generado también menor conflictividad, y aunque las relaciones con los colectivos surgidos después de la crisis son todavía demasiado recientes, parece que puede haber margen para el diálogo. Aun así, desde el punto de vista de los movimientos sociales, se detecta una falta de autonomía de los mismos respecto de las dinámicas o impulsos institucionales que ponen de manifiesto su debilidad.

Conclusiones

Hemos considerado como eje principal las respuestas que frente a la crisis han articulado los diferentes agentes del territorio, en un doble análisis de la administración local y de los movimientos sociales presentes en la ciudad. La pregunta, en línea con la investigación en la que se enmarca de este trabajo, consistía en identificar las transformaciones o cambios de orientación de las dinámicas de gobernanza participativa y creemos haber confirmado algunos cambios significativos que sintetizamos en estas conclusiones.

En Donostia, a pesar del cambio de gobierno producido en 2011, defendemos, según la primera de las hipótesis de nuestro estudio, estamos ante un *“escenario de fortalecimiento, según el cual los actores locales y en particular los gobiernos locales estén entendiendo que el contexto actual de crisis exige extender y profundizar en las prácticas de gobernanza participativa”* (Davies and Blanco, 2014). La conclusión es que la mayor relación genera mayor capacidad de responder a la crisis en clave de gobernanza participativa, aunque hay que señalar que desde el punto de vista comparativo, en Donostia el impacto de la crisis es menor que en otras ciudades de su entorno, a la vez que el movimiento social es también menos contestatario. En este sentido, parece que el fortalecimiento responde no tanto a la búsqueda de una respuesta a la crisis como al cambio ideológico del gobierno, pasando de uno de centro-izquierda a uno más izquierdista. Sin duda este cambio tampoco es radical y de alguna manera profundiza una tendencia previa, teniendo en cuenta, que como hemos explicado, las prácticas pre-existentes, apuntaban hacia un modelo de mayor calidad democrática de la gobernanza participativa, podríamos ser más optimistas respecto a su consolidación.

Se entiende, en consecuencia, que el proceso de neoliberalización en Donostia ha sido significativamente distinto al de las ciudades de su entorno (incluidas las otras dos capitales de provincia del País Vasco). Identificamos un paisaje institucional (orientación de los gobiernos, tradición participativa), económico (menor impacto de la crisis y mayor cohesión social) y social (cierta debilidad y dependencia del tejido asociativo) que influye sobre el modelo de gobernanza que se ha desarrollado en la ciudad; es decir, la

transferencia normativa interjurisdiccional vinculada a la gobernanza presenta unas variaciones significativas.

Más en concreto, si aplicamos el esquema de Sorensen y Torfing a las redes de gobernanza en Donostia, habría que señalar que en el ámbito de la eficacia, la mayor debilidad del sistema actual reside en el alcance de las políticas. Todavía las redes de gobernanza se enmarcan en políticas sociales y culturales, y aunque se están empezando a aplicar también en la planificación urbanística, todavía no se puede evaluar su funcionamiento real. La mayor complejidad de estas políticas, en las que los intereses de actores del ámbito empresarial o de la sociedad civil presentan mayores grados de conflictividad, será el verdadero reto para la profundización del modelo participativo de la ciudad.

Respecto de los criterios de calidad democrática, el punto débil lo encontramos en la diversidad de actores que participan en las redes. El final del conflicto armado y los importantes pasos que los últimos años se están dando en materia de reconciliación y convivencia están influyendo ya en la normalización política y empiezan a verse señales positivas también en la dinámica de los procesos participativos. No obstante, la participación sigue estando vehiculada principalmente a través de gente que forma parte del tejido asociativo con un perfil similar desde el punto de vista socioeconómico y de integración política. La explicación podría ser el formato “clásico” de las reuniones (horarios, lugares, convocatorias, metodología, formas de convocatoria....) en el que parecen sentirse más cómodos los agentes sociales y ciudadanía con mayor tradición participativa, los cuales no suelen ser los excluidos socioeconómicos o/y políticos. A falta de un estudio en profundidad sobre los perfiles, las personas entrevistadas tanto desde la administración como desde el tejido social reconocen que hay sectores sociales (especialmente jóvenes e inmigrantes) que no participan en estos espacios.

Hablando de participación llama la atención el poco impacto de los nuevos movimientos sociales en Donostia. Más teniendo en cuenta la irrupción que han tenido en el Estado español. La respuesta puede ser que el neoliberalismo a medida que deteriora las estructuras sociales y organizativas previas, crea la estructura de oportunidad política para la creación de nuevas formas de gobernanza, organización y formas de actuación del tejido asociativo. No obstante, la ola del neoliberalismo es más débil en el País Vasco con un estado del bienestar mejor preservado que en España, una mayor renta per cápita y unos índices de desigualdad sensiblemente inferiores. Todo ello facilita que se preserven estructuras sociales y relacionales tanto de las instituciones como de la sociedad civil, lo cual impide los cambios bruscos y como mucho se adentra en lentas transiciones. Este proceso es ayudado por el grado de penetración de los partidos políticos en la sociedad vasca, sociopolíticamente bastante segmentada y organizada alrededor de los partidos políticos: medios de comunicación, sindicatos, tejido asociativo etc. No obstante, ya ha empezado el deshielo de este modelo, aunque sigue teniendo vigencia e influencia.

Todo ello nos lleva a subrayar la orientación ideológica del partido en el poder (centro-izquierda españolista e izquierda soberanista) como factor más influyente en el tipo

de respuestas institucionales frente a la crisis, tanto en las políticas de participación como en las políticas sociales. Mantener o profundizar en las dinámicas de gobernanza participativa y en la filosofía de la política social como derecho es, por lo tanto, una opción política que se está confirmando en Donostia, pero que comprobamos cómo se está desmontando en las ciudades de su entorno como Bilbao o Vitoria-Gasteiz y las razones son el color político (la voluntad política) de los que gobiernan.

Nos encontramos, en definitiva, ante una ciudad con un tejido social débil, pero con una tradición participativa importante en el ámbito institucional que en los últimos años está avanzando en las dinámicas de profundización democrática. Es cierto que resta un importante margen de mejora, sobre todo en el alcance de las políticas públicas afectadas por la participación, pero parece evidente que al margen de orientaciones distintas, en la capital guipuzcoana la cultura participativa está bien asentada en la forma de hacer política.

Referencias

Ajangiz, R. and Blas, A. (2008) *Mapa de experiencias de participación ciudadana en los municipios del País Vasco*, Bilbao: Gobierno Vasco.

Brenner, N., Peck, J. and Theodore, N. (2010) “Variegated neoliberalization: geographies, modalities, pathways” *Global Networks* 10(2): 182–222.

Brenner, N., Peck, J. and Theodore, N. (2010b) “After Neoliberalization?” *Globalizations*, September 2010, 7(3): 327-345.

Blanco, I., Bonet, J. and Walliser, A. (2011) “Urban governance and regeneration policies in historic city centres: Madrid and Barcelona”, *Urban Research & Practice*, 4(3): 326-343.

Cordero Ferrera, J. M. y Murillo Huertas, I. P. (2008) “La participación de los municipios en los ingresos de las Comunidades Autónomas”, *Presupuesto y Gasto Público* 53: 39-63.

Davies, J. S. and Blanco I. (2014) *Collaborative Urban Governance Under Austerity: A Comparative Study of Trends and Prospects in Spain and the UK*. Unpublished paper presented at the 44th Annual Meeting of the Urban Affairs Association, San Antonio, Texas, 21st March 2014.

Elorrieta, J. (2012) *Renovación sindical: una aproximación a la trayectoria de ELA. Mecanismos y procesos*, Tafalla: Txalaparta.

Fernández, J., Sevilla, C. y Urbán, M. (eds.) (2012) *¡Ocupemos el mundo! Occupy the world!* Barcelona: Icaria.

Jessop, B. (2002) *The Future of the Capitalist State*, Oxford: Blackwell.

Lavia, C., Moreno, G., y Aierdi, X. (2014) “Diferencias en el uso de los programas de rentas mínimas según nacionalidad: la renta de garantía de ingresos en la Comunidad Autónoma Vasca”, in *Revista Internacional de Sociología* 72 (3): 633-660.

Moreno, G. (2010) “Veinte años de rentas mínimas de inserción autonómicas: el caso vasco dentro del contexto español y europeo” in *Revista de fomento social*, 259: 471-490.

Navarro, C. J.; Cuesta, M. y Font, J. (2009) *¿Municipios participativos? Participación política y ciudadana en ciudades medias españolas*, Madrid: CIS.

Papadopoulos, Y. y Warin, P. (2007) “Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making democratic and effective?” *European Journal of Political Research* 46: 445-472.

Peck, J. (2012) “Austerity urbanism”, *City*, 16(6): 626-655.

Perugorria, I. and Tejerina, B. (2014) “Synchronizing identities: Crafting the space of mobilization in the Spanish 15M” in Petropoulos, N. P. and Tsobanoglou, G. O. (eds.) *The debt crisis in the Eurozone: Social impacts*, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Rodríguez, A. and Vicario, L. (2005) “Innovación, Competitividad y Regeneración Urbana: los espacios retóricos de la "ciudad creativa" en el nuevo Bilbao” in *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, 58: 262-295

Sorensen, E. and Torfing, J. (2009) “Making governance networks effective and democratic through metagovernance”, *Public Administration* 87(2): 234-258.

Subirats, J., Parés, M. y Blanco I. (2008) “Calidad democrática y redes de gobernanza: evaluar la participación desde el Análisis de las Políticas Públicas” en Parés, M. (coord.) *Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia participativa*. Barcelona: Ariel.

Swyngedouw, E. (2005) “Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State”, *Urban Studies*, 42(11): 1991-2006.

Telleria, I. (2008) “Los Planes Comunitarios de Altza (Donostia) y el Casco Viejo de Pamplona: un breve análisis comparado” en Martínez, Z. y Blas, A. (eds.) *Poder político y participación. Construyendo ciudadanía*, 11. Vitoria-Gasteiz: Servicio Editorial Gobierno Vasco.

Uribarri Hernández, I. (2012): “Historia y futuro de las rentas mínimas en Euskadi”, *Cuadernos de Trabajo Social*, 25(1): 75-85.